



DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs trimestre para esta capital, y 50 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCION.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la REINA nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE ESTADO.

Cancillería.

Anteayer á las ocho y media de la noche el Sr. Vizconde de Kerckhove, Enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario de S. M. el Emperador de los Orlímanos, tuvo la hora de entregar, en audiencia particular á S. M. la Reina nuestra Señora la carta que pone término á su misión en esta Corte.

Acompañaban á S. M. el Excmo. Señor Presidente del Consejo de Ministros, primer Secretario interino de Estado, y los altos funcionarios de la Real Casa; y anunciado previamente por el Sr. Introductor de Embajadores, el Sr. Vizconde al elevar dicha carta á manos de S. M. pronunció en castellano el siguiente discurso:

«SEÑORA: Las mismas circunstancias particulares que han motivado la supresión por mi Gobierno de algunas de sus Legaciones, han inducido á S. M. I. el Sultan á dar fin á la misión que tenía el honor de desempeñar cerca de vuestra augusta Persona.

Aunque no puede esta medida debilitar los estrechos vínculos de la antigua amistad que existe entre las dos Cortes, mi Gobierno no se ha decidido a adoptarla sin el mas profundo y sincero sentimiento. Pero lo confieso, Señora, este sentimiento no puede ser mejor que el mío al salir de un país que en poco tiempo había aprendido á estimar y á querer casi como una segunda patria.

Los tres años que he permanecido en España serán por viejo uno de los mejores recuerdos de mi carrera y aún de toda mi vida. Siempre me acordaré con gusto y gratitud de la augusta benevolencia de V. M. y de las altas cualidades de la nación española, como también de las simpatías que, aunque poco acreedor á ellas, se me han manifestado en este país.

Dignese V. M. permitirme que al entregarle esta carta, que da por terminada mi misión, ponga á sus Reales pies el homenaje de mi profundo agradecimiento y de los vivos deseos que, fuera como dentro de España, y en cualquier parte del mundo, donde me lleve la Providencia, no cesará de abrigar mi corazón por la completa felicidad de la ilustre y bondadosa Soberana de España, por la de su augusta familia, y por la del noble pueblo que Dios le ha confiado.»

S. M. se dignó contestar:

«Sr. Ministro: Veo con sentimiento que las consideraciones particulares que han movido al Emperador vuestro Soberano á suprimir algunas de sus Legaciones le han precisado á comprender entre ellas la misión que desempeñáis en Madrid. Estoy sin embargo firmemente persuadida de que esta resolución en nada debilitará las cordiales relaciones que de tan antiguo han unido á nuestras Coronas.»

Es satisfactorio para mí ver que llevais una impresión agradable de vuestra residencia en mi corte, donde me complazco en poder asegurar que habeis sabido grangear el arecio general y mi estimación particular por las cualidades que os distinguen;

Os agradezco, Sr. Ministro, los votos que formais por mi ventura, por la de mi familia, y por la del pueblo español, y á mi vez os deseo toda clase de felicidades.»

Acto continuo el Sr. Vizconde tuvo la hora de despedirse de S. M. el Rey.

Dirección de Comercio.

Habiendo fallecido en Argel el 27 de abril del próximo pasado sin hacer testamento María Pérez y Lloret, hija de Tomás y de María, natural de la provincia de Alicante, se publica el presente anuncio para que puedan acudir á hacer valer sus derechos ante el Consul general de España en aquel punto las personas que crean tenerlos á la herencia, cuya liquidación ha arrojado un saldo de 529 francos 15 céntimos.

(Gaceta de 7 del actual.)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaría.—Negociado 3º.

Remitido á informe de la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de Medinaceli para procesar á Don

Juan Molinero, Teniente de Alcalde del mismo punto, ha consultado lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Esta Sección ha examinado el expediente en virtud del que el Gobernador de la provincia de Soria ha negado al Juez de primera instancia de Medinaceli la autorización que solicitó para procesar al Teniente de Alcalde del mismo pueblo D. Juan Molinero.»

Resulta:

Que habiendo designado este funcionario para el alojamiento de un Comandante de caballería la casa de su vecino Don Lamberto Martínez García, se le presentó este suplicio que le relevase de tal cargo en aquella ocasión por tener sus habitaciones enteramente ocupadas con dos hermanos suyos que habían llegado de fuera; prometiéndole aceptar el primer alojamiento que otra vez se le presentase;

Que se negó el Alcalde á satisfacer esta pretensión; y como después de buscar Don Lamberto Martínez otra casa para alojar al Comandante no la encontrase, le proporcionó en la posada una habitación, que según varias declaraciones, era decente y cómoda, y estaba servida para otros Jefes de igual graduación, y así se lo manifestó al Alcalde;

Que resistió el Comandante ir á la posada, alegando que no era la habitación bastante decente; que llevaba cañones que no creía seguros allí, y que no creía conveniente que sus caballos estuviesen con las demás caballerías de la posada; y entonces el Alcalde, presentándose con el Alguacil y dos Regidores en la casa de Don Lamberto Martínez, le mandó abrir un departamento de ella, y manifestando éste que solo cedería á la fuerza, tomó la llave, dispuso que el Alguacil abriese, e instaló allí el alojado, temiendo que saliera los hermanos del dueño de la casa á buscar habitación fuera de ella, según declararon varios testigos;

Que por último pidió Don Lamberto Martínez al Alcalde certificación de sus providencias para reclamar contra él, y le fue negada;

Que con tales antecedentes el Juez de primera instancia, ante quien se querelló D. Lamberto Martínez, pidió la autorización de que se tratase, separándose del dictámen del Promotor Fiscal, y fundándose en que procede aplicar al Teniente de Alcalde los artículos 299 y 301 del Código penal;

Que el Gobernador negó la autorización estimando, de acuerdo con el Consejo provincial, que no puede calificarse de abusiva la conducta del Alcalde Interino;

Visto el párrafo quinto del art. 72 de la ley de organización y atribuciones de los Ayuntamientos de 8 de enero de

1845, al tenor del que corresponde á los Alcaldes suministrar á las tropas nacionales los bagajes y alojamientos con arreglo á lo que disponen ó dispusieren las leyes:

Visto el art. 299 del Código que se refiere al empleado público, que abusando de su oficio, allanase la casa de cualquiera persona, á no ser en los casos y en la forma que prescriban las leyes:

Visto el art. 501, que comprende el empleado público que arbitrariamente rehusase dar certificación ó testimonio, ó impidiese la presentación ó el curso de una solicitud:

Considerando:

1.º Que el Teniente de Alcalde de Medinaceli cumplió con lo prevenido en el artículo citado de la ley municipal, sin que conste que abusara de su oficio cometiendo allanamiento de morada, pues se limitó á ejecutar contra la indebidamente resistencia de un particular la orden que había dado en uso de sus atribuciones, siendo él única Autoridad competente para apreciar en aquel momento, y en arreglo á circunstancias locales y personales, así las excusas del vecino, como las razones alegadas por el Jefe militar para no aceptar la habitación que se le ofrecía en la posada del pueblo.

2.º Que por el contrario faltó á su deber el Alcalde negándose á dar la certificación de sus providencias que se le pedía, y en tal concepto puede ser aplicable el art. 501 del Código también citado;

La Sección opina que debe confirmarse la negativa del Gobernador de Soria por lo que se refiere al cargo de allanamiento de morada, y concedérse la autorización por no haber expedido el mismo Teniente de Alcalde el certificado que se le pedía.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (q. D. g.) resolver de conformidad con lo consultado por la referida Sección, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Disíguese á Y. S. muchos años. Madrid 24 de octubre de 1860.—Posada Herrera.

—Sr. Gobernador de la provincia de Soria.

Remitido á informe de la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de Alcazar de S. Juan para procesar á D. Ramón Arnaiz, Administrador subalterno de Propiedades y Derechos del Estado de Madrid, ha consultado lo siguiente:

Excmo. Sr.: Esta Sección ha examinado el expediente en virtud del que el

Gobernador de la provincia de Toledo ha regado al Juez de primera instancia de Alcazar de San Juan la autorización que solicitó para procesar al Administrador subalterno de Propiedades y Derechos del Estado de Madrid: los D. Ramón Arnaiz:

Resulta que el cargo formó a lo contra este funcionario es el haber variado o consentido que se variasen los mojones que indicaban el límite de los respectivos términos de los pueblos de Herencia y Camuñas, cuando por orden de su inmediato Jefe fué á dar posesión de una linea de los propios de este último pueblo al particular á quien se había adjudicado en pública subasta:

Que pedida la autorización en tal concepto, y de acuerdo con el dictámen del Promotor Fiscal, el Gobernador la denegó, conformándose con el parecer del Consejo provincial, porque de las exculpaciones del Administrador subalterno y de las diligencias practicadas por el Juzgado mismo aparece que no se tocaron los mojones que señalaban los términos jurisdiccionales de los pueblos limítrofes, sino que colocaron los peritos algunas piedras sueltas para señalar la extensión de la linea cuya posesión se daba, sin enterarse por esto en la cuestión de límites de los pueblos:

Visto el art. 442 del Código penal vigente, que es aplicable al que destruyese ó alterase términos ó límites de los pueblos ó heredades:

Considerando que no aparece que el Administrador subalterno de Propiedades y Derechos del Estado de Madrid destruyese ó alterase términos ó límites de pueblos, sino que sin ocuparse para nada de tales límites, toleró que los peritos que le acompañaban al hacer la demarcación de la linea cuya posesión se daba, colocasen algunas piedras sueltas para marcar la extensión de la misma, lo cual ya era licito hacer, fuése en el término de uno ó más de los pueblos limítrofes.

2º Que esto, supuesto, no puede tener aplicación al caso presente el artículo citado del Código;

La Sección opina que debe confirmarse la negativa acordada por el Gobernador de Toledo.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por la referida Sección, de Real orden lo comunicó á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de octubre de 1860.—Posada Herrera.—Sr. Gobernador de la provincia de Toledo.

Remitido á informe de la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de Lena para procesar á D. Manuel González, Alcalde que fue de dicho Concejo en 1857; al Secretario del Ayuntamiento D. Gabino de Aza López, y á D. Miguel Pidal, Auxiliar del cuerpo de Montes de aquella comarca, ha consultado lo siguiente:

Exmo. Sr.: Esta Sección ha examinado el expediente en que el Gobernador de la provincia de Oviedo ha negado al Juez de primera instancia de Lena la autorización que solicitó para procesar á D. Manuel González, Alcalde que fue de dicho Concejo en 1857; al Secretario del Ayuntamiento D. Gabino de Aza López, y á D. Miguel Pidal, Auxiliar del cuerpo de Montes de aquella comarca:

Resulta:

Que en agosto de 1859 procedió el Alcalde de la Plaza de Lena á instaurar, de oficio y en virtud de un acuerdo del Ayuntamiento, diligencias sumarias en averiguación de los autores y cómplices de las suplantaciones y falsedades de varios acuerdos que se suponía haber adoptado aquel Ayuntamiento en abril, noviembre y diciembre de 1857 y en abril de 1858, relativos los tres primeros a haber infi-

mado favorablemente al establecimiento de una fábrica de ferretería en la parroquia de Horcas, y á la autorización para que la compañía de dicha fábrica cortase 400 hayas y aprovechase las leñas muertas del monte que se cita, y el otro referente á una comisión que se suponía nombrada por el Ayuntamiento para que en unión con el Auxiliar de Montes de la comarca, pasase á demarcar los parajes en que debía hacerse el aprovechamiento de las leñas:

Que como cabeza de las diligencias y fundamento principal de ellas, aparece en copia certificada una instancia elevada por el Ayuntamiento de Lena en julio de 1858 al Gobernador de la provincia en solicitud de que se suspendiesen los expedientes gubernativos pendientes sobre peticiones de la compañía de la citada fábrica de ferretería para que se les concediesen aprovechamientos de leñas, porque la dicha fábrica había sido establecida sin las formalidades prevenidas, perjudicando los intereses del común y sin contar con el Ayuntamiento:

Que también figuró en copia la resolución del Gobernador, desestimando la pretensión del Ayuntamiento, porque se trataba de una concesión hecha por Real orden, y porque la suspensión que se solicitaba debía ser objeto de expediente, á cuya instrucción podría procederse en la forma que la Municipalidad creyere deber hacerlo:

Que de otras diferentes comunicaciones, de que aparece certificación habida sobre el particular entre el Gobernador, el Alcalde que fué de Lena D. Manuel González, y el Ingeniero y Auxiliar del ramo de Montes, y de las numerosas declaraciones recibidas por el Alcalde actual de Lena, resultaron datos bastantes para sospechar que en efecto se habían suplantado algunos acuerdos del Ayuntamiento de 1857 sobre los informes dados por éste en favor de la concesión para establecer la fábrica y para el aprovechamiento de leñas del monte del comun; recayendo al parecer la principal responsabilidad de aquellas falsedades contra D. Manuel González, que como Alcalde firmó los informes elevados al Gobernador, refiriéndose á acuerdos del Ayuntamiento, de los que, unos no se celebraron, y otros aparecieron celebrados en sentido contrario al que se supuso:

Que entre dichos acuerdos aparece uno celebrado en 26 de noviembre de 1857, en el que se supuso que el Ayuntamiento había informado no tener inconveniente en que se autorizase á la compañía de la ferretería para cortar 400 hayas en el monte del Cordal de los Llanos; y habiendo resultado esencialmente alterado, porque el acuerdo fué negativo á dicha autorización, se hizo recaer la responsabilidad de aquella falsedad en D. Gabino de Aza y López, Secretario de la Municipalidad, por lo cual se le formó causa criminal, siendo condenado á siete meses de presidio correccional por sentencia en vista, pendiente hoy de súplica:

Que el Ayuntamiento de Lena, sabedor de que de los descargas dados por dicho D. Gabino de Aza, al desenterrarse en la causa mencionada, podrían deducirse mas falsedades y excesos que los que hasta entonces había presumido, premovió la averiguación y formó el sumario referido, indicando también sospechas de complicidad respecto de D. Miguel Pidal, Auxiliar de Montes de aquella comarca, porque en sus comunicaciones con el Ingeniero había manifestado haber concurredido con el Alcalde D. Manuel González y el representante de la ferretería a reconocer y designar los puntos en que había de hacerse el aprovechamiento de leñas, de acuerdo con el parecer del Ayuntamiento, lo cual no constaba:

Que también hubo sospechas de criminalidad contra el citado Secretario D. Gabino de Aza, porque en el año de

1857, cuando se instruyó el expediente de autorización para establecer la ferretería, había expedido certificación el D. Gabino de haber estado expuesto al público en los sitios de costumbre durante veinte días, el edicto mandado publicar por el Gobernador sobre el proyecto de establecimiento de la fábrica; hecho desmentido por once testigos conforme que negaban haber visto aquel documento expuesto en los sitios acostumbrados, no constando tampoco en las actas de la Municipalidad ninguna que exprese haberse recibido el edicto ni acordado su publicación:

Que remitido el sumario al Juzgado de primera instancia, dispuso éste la ratificación de los testigos, y dió parte de la formación de la causa al Tribunal superior, el cual mandó que el Ayuntamiento concretase mas los cargos y las personas contra quienes debiera procederse como delincuentes, en cuya virtud el Ayuntamiento manifestó que no había sido su ánimo mostrarse parte en la causa ni denunciar delincuentes, sino averiguar la verdad de las falsedades cometidas, e indicar las personas sobre quienes recaían las sospechas; pero insistió en determinar las suplantaciones y falsedades de los acuerdos referidos, originadas de diversas resoluciones perjudiciales á los intereses del pueblo y á los fueros de la justicia:

Que el Juez, de acuerdo con el Promotor Fiscal, y sin razonar éste su dictámen, ni aquél su providencia, pidió autorización para procesar al Alcalde D. Manuel González, al Secretario D. Gabino de Aza, y al Auxiliar de Montes D. Miguel Pidal:

Que el Gobernador, después de haber oido la defensa del Secretario y del empleado de Montes, y no la del Alcalde, porque, según comunicación del que hoy desempeña este cargo en Lena, fecha 16 de julio del corriente año, había fallecido en Oviedo, negó la autorización; de acuerdo con el Consejo provincial, fundándose en que D. Manuel González ha dejado de existir; en que no se han precisado bastante los cargos contra D. Gabino de Aza, y en que los que se han indicado vagamente no aparecen justificados, no siendo tampoco justificable D. Miguel Pidal, porque en todos los actos que ejecutó en este asunto obró por mandato de sus superiores:

Visto el art. 8º, párrafo undécimo del Código penal, que exime de responsabilidad criminal al que obra en cumplimiento de un deber, ó en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio ó cargo:

Visto el art. 226 del mismo Código penal, que declara culpable de falsedad al empleado público que faltare á la verdad en la narración de los hechos, ó ocultare un documento oficial en perjuicio del Estado ó de un particular:

Considerando:

4º Que en 1858 falleció D. Manuel González, responsable en primer término de las suplantaciones y falsedades de varios acuerdos e informes del Ayuntamiento, origen de este expediente, por lo cual no puede iniciarse procedimiento alguno para exigirle la responsabilidad criminal, pero si para lo civil.

2º Que aparecen indicios vehementes contra D. Gabino de Aza y López por haber cometido falsedad en el hecho de difundir la exposición al público durante 30 días de un edicto, comunicado por el Gobernador y cuyo conocimiento era de gran interés para todo el vecindario, habiendo declarado después 11 testigos conforme que ni vieron el edicto en los sitios de costumbre, ni tuvieron jamás noticia de su publicación.

5º Que tampoco se ha encontrado entre las actas del Ayuntamiento de aquella época ninguna que haga referencia á la remisión del edicto por el Gobernador ni á la orden de su publicación en el pueblo y sus centros.

5º Que no puede hacerse cargo alguno por su conducta oficial en este negocio á D. Miguel Pidal, Auxiliar de Montes de la comarca, porque al desempeñar sus funciones en concurrencia con el Alcalde y representantes de la fábrica, no hizo otra cosa que cumplir las órdenes terminantes del Ingeniero Jefe de Montes, su inmediato superior, según consta debidamente justificado por las comunicaciones que en el expediente obran;

La Sección opina que no ha lugar á resolver sobre la autorización para procesar criminalmente al Alcalde D. Manuel González por haber fallecido, sin perjuicio de que pueda hacerse efectiva en la herencia del mismo la responsabilidad civil á que haya lugar; que debe concederse la autorización respecto de D. Gabino de Aza y López, por el hecho de haber dado certificación de una diligencia que no resulta tuviérase lugar; y que debe confirmarse la negativa del Gobernador respecto de D. Miguel Pidal, empleado de Montes.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (q. D. g.) resolver de conformidad con lo consultado por la referida Sección, de Real orden lo comunicó á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de octubre de 1860.—Posada Herrera.—Señor Gobernador de la provincia de Oviedo.

(Gaceta del 8 del actual.)

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Exmo. Señor: Entérada la Reina (Q. D. G.) de la comunicación de V. E. dirigida á este Ministerio, manifestando la conveniencia de que se designen los puntos en que los condenados á la pena de relegación hayan de sufrirla; visto el art. 102 del Código penal, y de conformidad con el dictámen emitido por el Consejo Real, hoy de Estado, S. M. se ha servido mandar se diga á V. E. que la pena de relegación perpetua debe cumplirse en las islas Marianas, y en la de Mindoro la de relegación temporal, cualquiera que sea el grado en que esta se imponga; dejando al prudente arbitrio del Capitán general de Filipinas la facultad de trasladar á los que estén cumpliendo tales condenas á otro punto del distrito de su mando, siempre que lo estime conveniente.

De Real orden y contestando á su citada comunicación fecha 6 de marzo de 1856, lo digo á V. E. á los efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de noviembre de 1860.—Santiago Fernández Negrete.—Sr. Ministro de la Gobernación.

Negociado 10.—Circular.

En vista de una comunicación dirigida á este Ministerio por el de Fomento, acompañando otra del Gobernador de la provincia de la Coruña, de la que se deduce que han ocurrido dudas sobre si el conocimiento del décto de tales cortas fraudulentas en los montes y dehesas del Estado corresponde á los Tribunales del fuero ordinario ó á los especiales de Hacienda:

Considerando que en las Ordenanzas del ramo, decreto de 22 de diciembre de 1833, expresamente se consigna que la jurisdicción civil ordinaria debe conocer de los hechos de aquella clase:

Considerando además que las jurisdicciones especiales no pueden por su índole misma avocar á sí el conocimiento de

ctros delitos que los que señalamiento les atribuye la legislación vigente, entre los cuales no se encuentran los de que se trata;

La Reina (Q. D. G.) se ha servido declarar, de conformidad con lo consultado por el Consejo Real, hoy de Estado, que á los Juzgados del fuero ordinario corresponde conocer del delito de cortas y tañas fraudulentas en los montes y dehesas del Estado.

De Real orden lo digo á V. S. á los efectos consiguientes. Dios, guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de noviembre de 1860.—Fernandez Negrete.—Sr. Regente de la Audiencia de....

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaria.—Negociado 3.^º

Remitido á informe de la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Cons. jo de Estado, el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de Salas de los Infantes para procesar á D. José Simal, Maestro de Instrucción primaria de Quintanar de la Sierra, ha consultado lo siguiente:

«Esta Sección ha examinado este expediente, en virtud del que el Juez de primera instancia de Salas de los Infantes pidió al Gobernador de la provincia autorización para procesar á D. José Simal, Maestro de Instrucción primaria de Quintanar de la Sierra:

Resulta que D. Pedro Chapero dió parte al Juzgado de que un hijo suyo de corta edad había sido golpeado por el citado Maestro, en términos de que dicho niño estuvo en cama por aquella causa, siendo necesaria la asistencia facultativa, de cuyo hecho dió conocimiento al Alcalde un parente suyo, quien instruyó diligencias en averiguación, las que según creía no se habían pasado al Juzgado; que en otras ocasiones el mismo Maestro había usado iguales tratamientos con los niños de cuya educación está encargado, sin que fueran bastante para eximirlo las amonestaciones que se le hicieron;

Que ratificado Chapero en su denuncia, y reclamadas al Alcalde dichas diligencias, consta de las mismas la denuncia del hecho; y que el Facultativo titular, quien por mandato del Alcalde reconoció al expresado niño, dijo en su declaración que solo le había advertido una calentura remitente de fácil y pronta terminación, manifestando por oficio á los dos días hallarse el enfermo bastante mejorado y limpio de calentura, cuya indisposición á su juicio no pasaría de cinco días;

Que examinados los testigos citados por el denunciante en su ratificación, y evacuadas las citas hechas por aquellos, todos declararon la certeza del hecho y la existencia de otros de igual naturaleza ocurridos con dicho Maestro, pero refiriéndose á otras personas á quienes lo oyeron; advirtiéndose que muchos de dichos testigos eran niños que el mayor de ellos no pasaba de 12 años:

Que por declaraciones de todos los Facultativos que se citaron por los testigos para justificar el mal tratamiento del Maestro con algunos niños que expresaron por haberles asistido aquellos en dichas ocasiones, se hizo constar la inexactitud de los hechos denunciados; pues si bien estuvieron enfermos aquellos niños, su indisposición fué debida á otras causas sin relación alguna con el maltrato ó golpes que pudiera darles el Maestro;

Que el Juez, oido el Promotor fiscal, pidió al Gobernador de la provincia autorización para progresar al citado Maestro, la que le fué negada previo informe del Consejo provincial y oido el interesado;

Que éste manifestó que en los 29 años que estaba de Maestro en dicha villa nunca había sido reconvendido ni amonestado

por las Juntas locales de Instrucción ni por Autoridad alguna ó Inspectores del ramo, quienes jamás recibieron queja acerca de su comportamiento; que era cierto corrigió al hijo de Chapero, sin que se le pudiera culpar por el de haberle maltratado, lo cual motivó que se le llamase á juicio por aquel, y se le exigiese en dicho acto hiciese renuncia de su cargo de Maestro, pues soñó de este modo no produciría la queja ante el Tribunal, insistiendo después por conducto del Secretario del Ayuntamiento en lo mismo, todo ello por ciertos fines particulares que omisión.

Visto el art. 40 del reglamento provisional de las Comisiones de Instrucción primaria, por el que se encarga á las Comisiones locales que celebren la conducta de los Maestros y su aptitud para el desempeño de sus funciones, amonestándoles privadamente á los que faltan á su obligación, y dando cuenta á la Comisión superior cuando sus consejos ó correcciones no fueren suficientes, reservándose por el artículo 20 del mismo á las Comisiones provinciales la facultad de suspender de sueldo á los Maestros, y proponer á S. M. su separación definitiva:

Visto el art. 33 del reglamento interior de Escuelas públicas, por el que se facilita á los Maestros para la imposición de algunos castigos á los niños, reconociéndose en el mismo y en el anteriormente citado la dependencia de los Maestros en esta parte de las Comisiones locales y provinciales:

Considerando que si bien algunos testigos declararon el mal tratamiento que daba el citado Maestro á los niños de cuya instrucción estaba encargado, hasta el punto de ocasionarles ciertas lesiones para cuya curación fué necesaria la asistencia facultativa, estos hechos, é igualmente el denunciado por D. Pedro Chapero, fueron desmentidos por otros varios que dieron testimonio en estos procedimientos, y especialmente por los cuatro Profesores del arte de curar, quienes niegan asistiesen á dichos niños ni á otros por los castigos dados por aquel Maestro, como supusieron los referidos testigos que les citaron en comprobación de sus dichos;

Considerando que de ser ciertos los hechos denunciados hubiera tenido conocimiento de ellos la Comisión local de Quintanar de la Sierra, reprendiendo é imponiendo alguna corrección al citado Maestro, y hasta hubiera promovido su separación del Magisterio ante la Comisión provincial, sin perjuicio de lo demás que procediese según la naturaleza del caso:

Considerando que no se ha hecho constar en la causa que dicho Maestro fuere amonestado ni reprendido por sus superiores con motivo de los excesos que se le atribuyen, y que por el contrario se ha justificado la inexactitud de los expresados hechos, no habiendo por tanto delito ni falta alguna que perseguir por los Tribunales ordinarios, y cuya corrección ó castigo corresponde á los mismos;

La Sección opina que debe confirmarse la negativa del Gobernador de Burgos.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por la referida Sección, de Real orden lo comunica á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de octubre de 1860.—Posada Herrera.—Sr. Gobernador de la provincia de Burgos. (Gaceta del 9 del actual.)

SEGUNDA SECCION.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

ERRATA.

En la circular núm. 655, inserta en el Boletín oficial del 15 del corriente, y referente á la formación de expedientes para la exención de

venta de los montes comunes, se cometió el error material de decir en la línea décima «comisión» por «omisión.»

En el dia 15 de diciembre próximo á la una de su tarde se verificará en mi despacho la subasta del Boletín oficial de Ventas de Propiedades y Derechos del Estado, bajo el pliego de condiciones que a continuación se inserta.

Oriente 14 de noviembre de 1860.—Francisco Javier Camuño.

Pliego de condiciones que se cita en la anterior circular.

1.^a El rematante quedará obligado á publicar el Boletín oficial de Ventas de Bienes nacionales por el tiempo de un año si antes no terminasen los trabajos que le promuevan, insertando en éstos los anuncios de subastas de fincas, fincos y censos que radiquen en la provincia y los de arriendos de las mismas. Asimismo habrá de insertar todas las disposiciones superiores que se dicten respecto al ramo de Bienes Nacionales por lo que se refiere á ventas, no insertando en él otros anuncios que los relativos al objeto á que se halla destinado.

2.^a Se sujetará precisamente para la inserción de dichos anuncios á los originales que se le remitan por el Comisionado principal de Ventas de Bienes nacionales de la provincia, siendo responsable de cualquier error de impresión que se cometiera y reponiendo á su costa los que hubiera equivocado.

3.^a Será de cuenta del rematante el papel necesario para la impresión del Boletín, no pudiendo usar otro que el de tinta ó mano, con exclusión del continuo, de las mismas dimensiones que el del pliego común del sello y de igual calidad al que estará de manifiesto en las oficinas de la Comisión principal de Ventas.

4.^a El tipo de la letra que se emplea en la impresión, será del grado undécimo de ojo pequeño.

5.^a El editor insertará los anuncios en el Boletín dentro de las veinte y cuatro horas de la entrega de los originales, no retrasando este importante servicio por motivo ni pretexto alguno.

6.^a El número de ejemplares que ha de tirar el editor al precio de la contrata, será el de 150 y que habrá de entregar inmediatamente,

7.^a Si el contratista dejase de cumplir algunas de las condiciones anteriores, quedará por solo este hecho rescindido el contrato, resarciendo gubernativamente los perjuicios irrogados al Estado á juicio de la Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado, con las sumas en metálico ó en efectos de la Deuda pública consignados en garantía de las obligaciones de aquél, quedando á salvo su derecho para instaurar sus reclamaciones ó demandas por la vía contenciosa-administrativa; en la inteligencia que la responsabilidad que contraiga dicho contratista por cualquiera falta de lo estipulado, se exigirá por la vía de apremio y procedimiento administrativo de que se habla en el artículo 41 de la ley de Contabilidad, con entera sujeción á lo dispuesto en la misma y la renuncia absoluta de todos los fueros y privilegios particulares.

8.^a La fianza ó garantía de que trata la condición anterior, consistirá en 2,000 reales en metálico ó su equivalencia en efectos de la Deuda consolidada ó diferida a precio de cotización el dia siguiente al

de la subasta ó acciones de cada tercio por todo su valor.

9.^a Para presentarse como licitador en la subasta han de consignarse precisamente 500 rs. en metálico en la Tesorería de Hacienda pública de la provincia, acreditándolo con el correspondiente resguardo que será devuelto á los licitadores con excepción del mejor postor, a quien se rendirá interin se aprueba el remate por la Dirección general y lleva el adjudicatario la condición que precede.

10. No se admitirá postura que excede de treinta céntimos el pliego de impresión,

11. Las proposiciones se harán en pliegos cerrados con sujeción al modelo que se inserta á continuación, acompañando el documento que acredite la consignación del depósito para licitar sin cuyo requisito no serán admitidas. Se recibirán proposiciones en pliego cerrado durante la primera media hora de abierto el acto del remate; transcurrida, se abrirán y leerán aquellos, declarándose como mejor postor al que suscriba la más ventajosa, consultando inmediatamente el Gobernador á la Dirección la adjudicación de la contrata, á fin que haciéndolo ésta al Gobierno, recaiga la aceptación y aprobación superior correspondiente, sino hubiere inconveniente alguno y sin la cual no tendrá efecto.

12. En el caso de que resulten dos ó mas proposiciones iguales, se celebrará únicamente entre sus autores segunda licitación oral por espacio de media hora, adjudicándose el remate al mejor postor.

13. El pago del precio en que se haga la adjudicación, se verificará por la Tesorería de Hacienda pública de la provincia en los términos que previene la Real orden de 11 de febrero último, que consta en el expediente que se halla de manifiesto en la Comisión principal de Ventas,

14. La subasta tendrá efecto con asistencia del Administrador principal de Propiedades y Derechos del Estado, Comisionado principal de Ventas de Bienes nacionales y el Fiscal ó el que haga sus veces.

15. El contratista del Boletín podrá expenderle al público ó admitir suscripciones en beneficio suyo al precio que le convenga.

16. La publicación del Boletín de Ventas no impedirá se anuncien también las subastas de las fincas en la Gaceta de Madrid ó en los Boletines oficiales de las provincias, siempre que se considere necesario.

17. Los derechos de subasta, escritura y toma de razón serán de cuota del contratista sujetándose éste, en el caso de que faltase al otorgamiento de aquélla, á lo que previene el artículo 5.^a del Real decreto de 27 de febrero de 1852 relativo á la celebración de toda clase de contratos para servicios públicos.

Modelo de proposición.

Don N. N....., vecino de..... enterado del anuncio publicado con fecha de..... y de las condiciones y requisitos que se establecen para la publicación del Boletín oficial de Ventas de Bienes nacionales, se compromete á tomarlo á su cargo, con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones por el precio de..... céntimos cada pliego de papel impreso de la marca del sellado.

(Fecha y firma.)

